

Crisis sanitaria internacional

Más miedo da el hambre

Trabajadores sociales constatan que hay familias que rehúsan el control sanitario para no perder ingresos **≡ Las entidades piden** ayudas para los que se confinen

ELISENDA COLELL
BARCELONA

O dar de comer a sus hijos, o confinarse. En esta disyuntiva se encuentran cientos de familias que se están saltando los controles sanitarios impuestos por el coronavirus. Los trabajadores sociales de los CAP tratan de sensibilizar en las medidas de protección, darles alimentos y persuadirlos, pero ven día tras día cómo se niegan a dar sus contactos para evitar el rastreo, o directamente, dan portazo a hacerse la

prueba PCR. No es que no teman el virus, es que hay consecuencias quizá peores: quedarse sin techo y sin un precario e inseguro empleo. Las entidades sociales piden a la Administración ayudas a estos hogares para que, al menos, tengan algo a que aferrarse durante los 14 días de encierro.

Vivían en una habitación realquilada, con varias familias más, en el barrio del Besòs, en Barcelona. Uno de ellos accedió a hacerse un test PCR que confir-

mó el diagnóstico: había enfermado de coronavirus. En cuanto el inquilino principal que les alquilaba la habitación se enteró del contagio, les expulsó de la vivienda sin miramientos, apoyados por el resto de realquilados que lo último que querían era contraer el virus. Enfermos, se quedaron en la calle. Este es uno de los casos que han ido llegando recientemente hasta la trabajadora social del CAP del Besòs Ana Huerta, que confirma la grave situación económica en la

que viven muchas familias de este barrio. Aquí la solución pasó por el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), que les encontró un lugar provisional donde esta familia se pudo confinar. En otros, hay quienes no quieren pasar por chivatos y no facilitan los teléfonos de los contactos a los rastreadores de Salut para evitar también el radar sanitario. Y el virus sigue, así, campando a sus anchas.

«Nos encontramos con per-

sonas que ya tenían un empleo precario antes de la pandemia; muchas lo han perdido y otras han logrado encontrar algo muy débil con la desescalada», explica Huerta. Unos empleos, a los que se refiere la trabajadora social, que en la mayoría de los casos son en la economía sumergida. Por ejemplo, aquellos que se dedican a buscar y vender chatarra, a vender productos en mercados ambulantes o playas, o quienes limpian casas o cuidan de dependientes. «Si se contagian del virus no pueden acogerse a un erte, tampoco a la baja laboral, se quedan sin ingresos para pagar las facturas», explica Huerta. La trabajadora trata de sensibilizar, darles cobijo en los *Hotel Salut* y ofrecerles alimentos, medicamentos, EPIS y demás material que puedan necesitar durante esta estancia. Pero sabe positivamente que muchas



Las familias pedirán cárcel por los triajes

► **Hijos de ancianos víctimas del covid-19 reclaman una investigación penal**

► **Una plataforma de afectados exige una mesa para reordenar las residencias**

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ
MADRID

Familiares de ancianos fallecidos por covid-19 en residencias pedirán cárcel para los responsa-

bles de los triajes sanitarios que durante la fase dura de la pandemia, en marzo y abril, dejaron sin atención hospitalaria a miles de personas mayores de 70 años

enfermas de covid-19.

Lo adelantó ayer Ángel Juárez, uno de los portavoces de la plataforma Afectados Coronavirus.org, a preguntas de EL PERIÓDICO en una rueda de prensa, que se convocó para anunciar que van a pedir a la Administración una mesa de diálogo que cambie el modelo de gestión de los geriátricos en España, basado en «una ley vieja y obsoleta».

La mesa habrá de servir también, según plantean, para abrir una auditoría independiente que esclarezca qué ha pasado en las residencias, y para que lo sucedido «no se vuelva a repetir».

En la misma comparecencia, la plataforma confirmó que cuentan casi 1.000 casos de fallecimientos en residencias que son causa de litigio judicial. Según datos de la patronal de las residencias, AESTE, fueron 19.500 los ancianos fallecidos por coronavirus en los geriátricos, si bien la cifra no tiene refrendo del Estado.

En torno a los triajes, Juárez, huérfano de una mujer fallecida sin que se le realizara ningún test, argumentó: «Se ha roto el

derecho más sagrado que existe, que es el derecho a la vida. Ha habido triaje y los peritos sanitarios y los jueces tendrán que determinar quiénes han sido los responsables. Pediremos cárcel para algunos».

La plataforma quiere «utilizar todos los medios jurídicos. Vamos a intentar pedir justicia para que no se vayan muchos sin haber pagado sus responsabilidades. ¡Habrá algún responsable más para tanta muerte además del coronavirus!», dijo Juárez.

CONTRA EL AISLAMIENTO // La plataforma habló en la misma jornada en la que trascendió que la Comunidad de Madrid ha diseñado un protocolo de medidas más



personas optan por hacer oídos sordos para seguir trabajando. «Los que más nos preocupan son los casos que no nos llegan, porque nosotros actuamos una vez hay diagnóstico», expone Huerta, que recuerda que muchas de las familias que atiende viven en pisos superpoblados, con hasta 20 personas. Un confinamiento «imposible».

Pero la realidad del Besòs se repite en demasiados barrios del Área Metropolitana. «O comen, o se confinan: hay familias que no pueden permitirse el lujo de enfermar de coronavirus, y por ello se escapan del control sanitario y las PCR», dice contundente Toni Gavín, miembro de la junta de la federación d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS). En Barcelona todas las personas que residen en infraviviendas tienen padrón, y por ende, tarjeta sanitaria y asistencia médica

asegurada. Algo que no ocurre en el resto de ciudades metropolitanas. «Habría que hacer un plan de salud comunitaria en el área metropolitana que trate de llegar a estos hogares y sensibilizar», añade Gavín.

Campañas y prestaciones

Otra de las propuestas que hacen desde ECAS es la de extender campañas para dar a conocer los derechos de los trabajadores. «Nos encontramos casos de personas que sí tienen trabajos presenciales con contrato, como en el mundo del turismo o la restauración, que no saben que tienen derecho a coger la baja si contraen el virus», expone. Pero el gran drama se encuentra en todos los empleos sin contrato, ni derechos. «O les garantizamos ingresos mientras se encierran, o no habrá nada que hacer», sugiere Gavín.

Algunas familias han sido expulsadas de sus casas tras saberse que se han infectado del virus

El colapso de las prestaciones y la brecha digital impiden el acceso a muchas personas

«Una paga durante los días en los que se confinen podría ayudar a que muchas personas enfermas no salgan de casa, pero también muchos seguirían teniendo el temor de quedarse sin trabajo y que su frágil empleo se lo quede otro», añade Raúl Alcázar, director de la Fundació Serveis Socials, integrada dentro de la fundación sanitaria Sant Pere Claver. La entidad gestiona uno de los *Hotel Salut* en Barcelona, que ha servido como vivienda de muchas personas sin hogar que, tras infectarse, necesitaban confinarse. «Hay personas que acceden a ir al hotel porque, aunque no pueden seguir trabajando, al menos tienen garantizada alimentación e higiene. El problema está en aquellos que tienen hijos o dependientes que cuidar, de ellos depende todo un hogar. Y estos son los que se niegan a encerrarse», añade.

¿El ingreso mínimo vital o la renta garantizada podrían resolver esta situación? «El problema es que esta ayuda se tiene que pedir por internet, y muchas familias no tienen ni ordenador ni ordenador wifi, ni saben como funciona el trámite», cuenta Huertas. «Y luego está el colapso de los trámites, que desde que lo piden hasta que lo pueden cobrar pasan muchos meses, estamos hablando de familias que no tienen ahorros y viven al día, no pueden esperar toda esta demora, prefieren trabajar», añade Alcázar.

«Esta pandemia está poniendo de relieve las gravísimas desigualdades en las que vivimos. Los responsables sanitarios necesitan respuestas rápidas, pero hay problemas que llevamos años arrastrando y que requieren de respuestas complejas», insiste Gavín. ≡

MANU MITRU



Colas para hacerse los tests PCR en Santa Coloma de Gramenet, el lunes pasado.

JOSÉ LUIS ROCA



Traslado de un anciano en la residencia Casablanca de Valdemoro, ayer.

restrictivas en las visitas e ingresos en las residencias, informa Europa Press. Un plan de la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria del gobierno de Madrid prevé tres escenarios de incidencia del virus, y sus respectivas y crecientes limitaciones en el acceso a los geriátricos.

Los familiares de la plataforma rechazan esa posibilidad. En su opinión, a diferencia de los momentos iniciales de la pandemia, ya no hay escasez de medios de protección. «Que por miedo al contagio se queden aisladas personas a las que queda poco tiempo de vida es irracional –protestó Juárez– si hay trajes que protegen perfectamente».

En la misma jornada, la pa-

«Se ha roto el derecho más sagrado que existe, el derecho a la vida», lamenta un afectado

tronal AESTE reclamó medidas más restrictivas del acceso a los geriátricos, incluida la supresión de visitas de familiares, y auguró una situación «complicada» las próximas semanas.

FOCOS PRINCIPALES // La plataforma pedirá a la Administración del Estado –y ya lo ha hecho en una carta a la vicepresidenta del Gobierno– una mesa de diálogo en el que se aborde el actual modelo de gestión de las residencias, incluidas las públicas, y con presencia de los fondos de inversión que poseen un buen número de centros privados, así como de las autoridades autonómicas, «pues Madrid y Catalunya son focos principales de este proble-

Pedirán una mesa de diálogo en la que la Administración aborde el modelo de gestión de las residencias

ma», dijo Juárez. El objetivo es «poner orden con nuestra gente y con nuestro dinero», añadió.

Los portavoces de la plataforma, entre ellos su asesora jurídica, Ana Romero, aseguraron que no quieren llenar de litigios la Justicia pero no renunciarán a la vía penal. Cualquiera de sus objetivos es inseparable de la exigencia de responsabilidades.

«No puede ser que los fondos de inversión recojan beneficios y se vayan de rositas», opinó Juárez, e insistió: «Se está intentando jugar al olvido rápido, pero se han ido muchos padres y madres sin despedirse. Aquí no olvida nadie. Son muchos muertos para recordar que aquí no se han hecho los deberes». ≡